

EL SOCIALISTA

Centroamericano

276



Guatemala: Q 4.00
 Honduras: L 12.00
 El Salvador: US\$ 0.60
 Nicaragua: C\$ 10.00
 Costa Rica: ₡ 500.00

Diciembre 2018

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

NICARAGUA.- 8 MESES DESPUÉS: LA DICTADURA ORTEGA-MURILLO SE AFERRA AL PODER, TRUMP IMPONE SANCIONES.... ¿QUÉ DEBEMOS HACER?



20 DE DICIEMBRE DE 1989: LA ÚLTIMA INVASIÓN YANQUI A PANAMÁ

EL SALVADOR.- DE LOS CUATRO PARTIDOS CONTENDIENTES NO SE HACE NI UNO: VOTEMOS NULO!!.



GUATEMALA.- Balance de la lucha de los médicos



EL SALVADOR.- STISSS entre el continuismo y la necesidad de cambios



COSTA RICA.- Analisis sobre consulta para levantar la huelga general

LA CRISIS DE LOS REGÍMENES POLÍTICOS EN CENTROAMÉRICA

La crisis económica y fiscal que carcome las bases de los Estados nacionales en Centroamérica, también se refleja en una crisis de los regímenes políticos nacidos en el periodo posterior a Esquipulas II (1987-1996)

El orden imperialista neocolonial impuesto en Centroamérica, con la aplicación de los Acuerdos de Paz en Nicaragua (1987-1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996), creó nuevos pero frágiles regímenes democrático burgueses, que ahora dan síntomas de una profunda crisis. En el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) el imperialismo norteamericano logró evitar el triunfo de la revolución, impulsando reformas a los gobiernos militares: se aprobaron nuevas Constituciones, un poco más democráticas que las que sirvieron de soportes a las dictaduras militares.

La única excepción de este exitoso proceso de reformas fue Nicaragua. En 1979, el triunfo de la insurrección popular destruyó las fuerzas armadas de la dictadura (la Guardia Nacional), creando un nuevo Ejército y una nueva Policía, encabezados por los antiguos comandantes guerrilleros. Después de soportar una prolongada guerra civil (1982-1990), estas fuerzas armadas que resistieron militarmente la embestida del imperialismo norteamericano, se convirtieron, después de 1990, en el nuevo eje de poder, y continúan siéndolo en la actualidad, con la particularidad que la columna vertebral de estas fuerzas armadas es fiel al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los nuevos regímenes políticos, más que sostenerse en una tradición de juego parlamentario de los partidos políticos (algo que las dictaduras militares habían impedido por dos o tres décadas) se asentaron en las fuerzas armadas victoriosas de cada país en donde hubo guerrillas o guerras civiles, con las peculiaridades ya señaladas en el caso de Nicaragua, donde la piñata creó abruptamente un nuevo sector burgués, alrededor de la oficialidad de las fuerzas armadas.

En pocas palabras, en toda Centroamérica las cúpulas de las fuerzas armadas siguieron siendo el centro del poder, pero ahora actuaban discretamente desde las sombras. No obstante, el proceso de enriquecimiento de la cúpula militar, que se había iniciado bajo las dictaduras militares, continuó después de los Acuerdos de Paz, dando origen a nuevos conflictos con sectores de la burguesía tradicional.

En Guatemala, la presencia y rol del Ejército han sido determinantes, desde la colonia hasta nuestros días. Las guerrillas no pudieron quebrar ese férreo control. Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el Ejército volvió a los cuarteles, pero siguió imponiendo presidentes, incluso por encima de la oligarquía. El actual presidente Jimmy Morales es un peón de la alta cúpula militar, que se resiste a las reformas que el imperialismo norteamericano pretende imponer a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para evitar el estallido de la revolución social en Guatemala.

Jimmy Morales pretende convertirse en el nuevo Bonaparte de Guatemala, prohibiendo la entrada del comisionado Iván Velásquez, cancelando las visas a otros 11 funcionarios de la CICIG, desafiando incluso a la Corte de Constitucionalidad (CC). Solo falta que intente reformar la Constitución para permite la reelección presidencial.

En Nicaragua, el régimen político paso del bonapartismo a la dictadura militar. Las máscaras democráticas se cayeron con las recientes masacres. Los militares protegen a Daniel Ortega, evitan su encarcelamiento y juzgamiento.

No es una casualidad que ambos regímenes, de naturaleza diferente, pero sostenidos por ejércitos gemelos, coincidan en la actualidad en un vacío discurso nacionalista, contra la injerencia de Estados Unidos. La coincidencia reside en que, tanto en Guatemala como en Nicaragua, los gobiernos y los regímenes se asientan en las fuerzas armadas, y reflejan los intereses de una burguesía militar que se quedó manejando los hilos del poder, y que nos los quiere soltar. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 276
Diciembre 2018

Impresión:
23 Diciembre 2018

DIRECTOR:
Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:
elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:
psoca@elsoca.org

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

**EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO**
es una publicación del
**PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA)**,
fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



UN BALANCE DE LA LUCHA DE LOS MÉDICOS

Por Armando Tezucún

Después de casi cuatro meses de tenaz lucha, los compañeros médicos que trabajan para el Ministerio de Salud lograron la aprobación del incremento salarial que demandaban para el próximo año. Las acciones incluyeron marchas, plantones frente al Congreso o la Presidencia de la República, y principalmente la suspensión parcial de los servicios de consulta externa, que inició el 13 de agosto. La demanda final de los galenos representaba un aumento de Q 601 millones para el presupuesto 2019 de la cartera de salud.

Cuando a inicios de noviembre los diputados del Congreso de la República empezaron la discusión del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2019, las acciones se centraron en la presión a los diputados, y el día 5 fue instalado un plantón permanente frente al Congreso, donde se empezó a dar atención primaria en salud a la población que lo requiriera.

El 19 de noviembre el Congreso aprobó el presupuesto 2019 en tercer debate, quedando pendiente su discusión por artículos y redacción final. Dado que ese día no se incluyó el aumento presupuestario a salud, se decidió plantear una enmienda consensuada entre representantes de los médicos, diputados y autoridades de los Ministerios de Salud y Finanzas, en una mesa técnica, que decidió recortes a cinco ministerios y otras dependencias, para cubrir parte del incremento salarial. La mesa también acordó implementar una reclasificación de puestos según la especialidad y experiencia de los médicos, con el fin de realizar el incremento salarial de forma ordenada.

Finalmente, el 27 de noviembre los diputados aprobaron el presupuesto 2019, por un monto

total de Q 87,715,064 millones. Entre las enmiendas aprobadas quedó el incremento a la asignación presupuestaria de salud por Q 351 millones, destinado al aumento salarial a los médicos, y una readecuación de Q 250 millones para completar los Q 601 millones demandados por los compañeros; además se aprobó la reorientación de Q 460 millones para cumplir con el aumento salarial



negociado por las autoridades del Ministerio con el mayoritario Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG).

El día 19, el Frente Nacional de Lucha (FNL), al que está afiliado el SNTSG, realizó una manifestación en las afueras del Palacio Legislativo, para demandar que las negociaciones sobre aumentos salariales entre los Ministerios de Salud y Finanzas beneficien no únicamente a los médicos, sino a todos los trabajadores de salud, y que se diera prioridad al pacto firmado con ellos. Es en extremo lamentable la actitud que asumieron los compañeros del FNL, pues en vez de buscar la unidad en acción con los médicos, que enfrentan al mismo patrono que los trabajadores afiliados al SNTSG, para presionar de forma más contundente, lo que hicieron fue lloriquear con el berrinche de que "¿por qué a ellos sí y a nosotros no?". Los compañeros de base del sindicato de trabajadores de la salud deben en el futuro abrir los ojos y exigir a sus dirigentes que abandonen

actitudes sectarias como esa y busquen la unidad con todos los que laboran para el Ministerio de Salud, sean médicos o los sindicatos minoritarios. De todos modos, las autoridades del Ministerio, como ya dijimos, lograron la aprobación de Q 460 millones para el incremento salarial demandado por el SNTSG.

Para caldear más las cosas, el 20 de noviembre, el sindicato mayoritario de educación, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), salió en manifestación hacia el Congreso para exigir la ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación, para que cumpla con lo estipulado en el Pacto Colectivo firmado con el gobierno en febrero. El FNL y el STEG hacen parte del Movimiento POVRES, desde el que coordinan acciones.

Luego de reunirse con la mesa técnica del presupuesto, la dirigencia del STEG logró que se entregue a cada docente un bono de Q 2,500 antes de que finalice el año, y el ministro de Finanzas les explicó que en el proyecto de presupuesto 2019 ya está incluido un aporte de Q 1,600 millones para cumplir con las obligaciones contraídas en el pacto colectivo firmado este año.

Durante dos días, de forma excepcional, coincidieron frente al Congreso representantes de los principales sectores de trabajadores estatales, salud y educación, que de hecho, debido a la profunda crisis financiera del Estado, es el segmento de trabajadores asalariados que más luchas ha protagonizado en las últimas décadas en Guatemala. Es deplorable que debido a la ceguera sectaria de los dirigentes del FNL y del STEG se haya desaprovechado la oportunidad de hacer un poderoso frente común, que podría haber incluido a los trabajadores y estudiantes de la Universidad de San Carlos, que también negociaban incremento presupuestario. ■

DE LOS CUATRO PARTIDOS CONTENDIENTES NO SE HACE NI UNO: VOTEMOS NULO!!

El próximo 3 de febrero del 2019 se realizarán las elecciones presidenciales en El Salvador. En esta ocasión, competirán solamente 4 partidos políticos, lo que marca un debilitamiento del sistema de partidos políticos. Dada la importancia de esta elección, por la crisis que arrastran el FMLN y de ARENA, es necesario analizar en la coyuntura actual, el programa de los partidos y sus candidatos, y que intereses representan cada una de las propuestas.

Para las elecciones del 2019, por primera vez, los candidatos presidenciales fueron escogidos en elecciones internas, lo que significó un leve avance en la participación popular en los asuntos políticos, pero la democratización del sistema electoral y de partidos políticos sigue siendo una aspiración. En la mayoría de casos los procesos de elecciones internas, con excepción del FMLN, solo sirvieron para legitimar y legalizar las propuestas impuestas por las cúpulas a sus bases. Ante las manipulaciones, la repuesta de las bases fueron el ausentismo, el voto nulo y papeletas en blanco.

Las próximas elecciones presidenciales se realizarán en el contexto de una profunda crisis económica y social, aumento de la migración en masa en búsqueda de trabajo y un enorme descontento popular. El desengaño y la decepción después de dos gobiernos del FMLN, ha creado un enorme vacío político, sin precedentes. Miles de activistas se han retirado del FMLN, surgiendo una enorme cantidad de pequeños grupos de izquierda, críticos al reformismo y aburguesamiento del FMLN.

Incapacidad para resolver la crisis financiera, violencia y delincuencia

Existe un estancamiento prolongado de la economía. Las remesas se han convertido en la principal fuente de ingresos, distorsionando la economía. Los gobiernos del FMLN prefirieron cargar la crisis financiera sobre la clase trabajadora, en vez de obligar al gran empresariado a pagar impuestos de acuerdo a sus ganancias. Llegaron, incluso, al extremo de echar mano a los fondos de pensiones.

La población salvadoreña demanda una salida al problema de la violencia y delincuencia crónicas, más y mejores trabajos con salarios dignos. Los partidos políticos de la burguesía manipulan dichas necesidades con la finalidad de atraer votos.

Ante el problema de la alta criminalidad, las formulas represivas aplicadas por los

gobiernos de ARENA y del FMLN mostraron ser ineficaces, ya sea porque maquillaron los problemas o porque sencillamente no pudieron combatir las causas de la marginalización de grandes sectores de la población.

Ante la incapacidad de los gobierno del FMLN, surgieron propuestas demagógicas como la de Guillermo gallegos, dirigente de GANA, en el sentido de implementar la pena de muerte: "...para mí es muy importante pedir desde aquí la aplicación de la pena de muerte para los pandilleros terroristas..."(EDH.22/01/2018). La solución al problema de la violencia y delincuencia no pasa por la masacre de un sector de la población marginalizada, sino que pasa por solucionar los problemas de desempleo y bajos salarios, para resolver la pobreza y la pobreza extrema que arroja a muchos jóvenes de las masas populares a la vida delictiva, al servicio del crimen organizado.

Los trabajadores y la izquierda revolucionaria debemos plantear una salida al problema de la violencia, no debemos permitir la instrumentalización de violencia como oferta electoral. Si fuese necesario, cualquier diálogo o negociación con las maras debe ser público, de cara a la nación, ante los medios de comunicación, para que sea el pueblo quien conozca y decida cuales son las medidas más adecuadas a tomar para terminar con la violencia y la criminalidad.

Clase trabajadora ha cargado con la crisis

Desde los gobiernos de ARENA hasta los gobiernos del FMLN la clase trabajadora ha retrocedido en sus conquistas históricas. Basta recordar los despidos de trabajadores realizados en el contexto de las privatizaciones, lo cual continuó empeorándose bajo los gobiernos del FMLN. En resumen, a los empleados públicos les han sido arrebatadas muchas conquistas y prestaciones.

La mayoría de los trabajadores del sector público no ganan un salario según su nivel académico o especialidad. La clase trabajadora del sector privado también ha visto un descenso del nivel y calidad de vida, ya que no ha existido un aumento y nivelación salarial real. Los aumentos del salario mínimo son risibles.

Los gobiernos de ARENA y también del FMLN han culpado a los empleados públicos, principalmente a los de salud y

educación, de no brindar un buen servicio, pero en realidad han sido los diferentes gobiernos los que no brindan las condiciones necesarias para que los trabajadores ejerzan sus labores adecuadamente.

Sistema político antidemocrático

Actualmente, a pesar de algunas pequeñas reformas democráticas, en la práctica continua vigente un antidemocrático sistema electoral, el cual se pone al servicio de los intereses del bipartidismo, ahora en crisis. Basta ver como otorgan o cancelan personalidades jurídicas, o mantienen partidos políticos de manera artificial, según su conveniencia. A pesar de las pequeñas reformas las condiciones excluyentes continúan iguales. Todavía existen insuperables requisitos para constituir nuevos partidos políticos, lo mismo ocurre con la inscripción de las candidaturas independientes y los complicados procesos para la inscripción de las mismas.

El sistema electoral no facilita la libre participación política de todos los sectores, siempre excluye a los más pobres. No han sido aprobados e incorporados mecanismos de participación en los asuntos políticos como el referéndum, revocatoria de mandato, tampoco ha sido otorgado el derecho democrático elemental que los ciudadanos tenga iniciativa de Ley.

La partidocracia continua imperante. Los Diputados son quienes eligen a los magistrados del órgano judicial, así mismo son quienes eligen al Fiscal General, Procurador General, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, etc. Debe ser el pueblo quien elija democráticamente a los altos funcionarios, contemplando además que cuando un funcionario no cumpla debe ser removido del cargo.

Corrupción e Impunidad

La mayor parte de los candidatos de los partidos en la contienda presidencial, han sido señalados de apropiarse de dinero del pueblo, unos han sido juzgados, a otros se les ha exonerado y otros continúan en la impunidad. La lucha contra la corrupción se ha convertido como un arma en la lucha entre los diferentes grupos de la burguesía. Cada fracción busca como desgastar a las otras, pero ninguna, cuando están en el gobierno, han logrado devolver el dinero robado.

Esto en gran parte se debe al hecho



que el órgano judicial, los funcionarios de alto nivel, son producto de negociaciones de cuotas de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Desde que asumen los cargos llevan compromisos con los partidos que los nombraron.

No existe opción para los trabajadores y el pueblo

Para las elecciones presidenciales del 2019 participarán: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) unidos a Nuevas Ideas y VAMOS. Es necesario analizar los diferentes partidos y sus candidatos, los cuales en mayoría han sido impuesto por las cúpulas, así mismo es necesario analizar la actuación de estos, su composición social e ideológica:

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): es un partido conservador que encabeza una coalición electoral derecha denominada "Alianza por un Nuevo País" a la cual se han unido el Partido Democracia Salvadoreña (DS), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Esta coalición representa los intereses del gran empresariado salvadoreño, en coyunturas ha adoptado ciertas posiciones demagógicas para atraer a los sectores en lucha, ya sea para desgastar a su contrincante político o para buscar votos. El candidato Callejas fue impuesto por el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA, lo cual no fue bien visto por sus bases, quienes prefirieron no asistir a las elecciones primarias, dándose casos de votos nulos y votos en blanco lo que mostró un rechazo a la forma como el COENA manejó el proceso electoral interno. Por su parte, la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo, proviene del PCN, partido de gobierno bajo las dictaduras militares.

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): es un partido que proviene de la antigua guerrilla del FMLN, que logró aprovechar el capital político acumulado por las anteriores organizaciones guerrilleras que le dieron origen. Después de dos periodos presidenciales continuos, ha decepcionado a decenas de miles. Si bien ha realizado algunas reformas, estas han sido insuficientes, ha aplicado dictados de los organismos financieros internacionales contra la clase trabajadora. Hugo Martínez fue elegido candidato presidencial del FMLN porque las bases rechazaron al candidato de la cúpula partidaria.

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA): es un partido que se autodefine de centro derecha, conformado en el año 2010 por una disidencia de ARENA. GANA fue parte del Movimiento Unidad (GANA-

PCN-PDC) que en el año 2014 lanzó la candidatura presidencial de Tony Saca, el mismo que ahora está siendo enjuiciado por desvío o robo de 300 millones de dólares del erario público durante su mandato presidencial (2004-2009).

El candidato de GANA, Nayib Bukele, disidente del FMLN, es la figura pública del Movimiento de Nuevas Ideas. Al no poder inscribir dicho movimiento como partido político, en último momento logró inscribirse como candidato presidencial de GANA, resultando ganador en las elecciones internas, pero con alto nivel de ausentismo, debido al rechazo de las bases de GANA por su imposición. GANA es un partido de derecha cuyos principales referentes ideológicos han sido el discurso radical-represivo contra las maras y las pandillas.

Bukele se ha presentado como el redentor del pueblo salvadoreño, lanzando duras críticas al FMLN y ARENA, lo que ha permitido ganar mucha popularidad hasta convertirse en una alternativa real para las elecciones del 2019.

La candidatura Bukele-GANA busca consolidar una alternativa de "derecha popular" como ellos mismos se autodenominan, para reemplazar a la vieja derecha de ARENA. El surgimiento de una nueva opción de derecha debilita a ARENA, y le da una bocanada de aire fresco al FMLN. Con este giro, Bukele se bajó del pedestal en que había sido colocado por el gueto de la izquierda salvadoreña, del que antes había sido referente. Sin lugar a dudas, el ascenso de Bukele debilita a ARENA.

VAMOS: Este partido participará por primera vez en elecciones presidenciales, se define como un partido de centro, su candidato presidencial es el empresario Josué Alvarado. Al igual que los demás, no representa una opción para las grandes mayorías.

Promesas, solo promesas

Las expectativas sobre quién debe ser el presidente de El Salvador superan la oferta electoral, debido a que todos los partidos giran alrededor de una misma agenda neoliberal, coincidiendo con los organismos financieros internacionales de reducir los beneficios públicos y cargar sobre la clase trabajadora y las masas populares la crisis crónica del Estado burgués en El Salvador. Ninguno de los actuales candidatos y sus partidos plantea un cambio estructural alterno al neoliberalismo, sino que son vertientes del mismo breviario, por lo que, con toda seguridad, ante la ausencia de candidaturas de los trabajadores, el próximo presidente se convertirá en el séptimo gobernante de este extenso y agobiante periodo neoliberal.

No queda más que el Voto nulo

Debido al antidemocrático sistema electoral, los trabajadores no han podido

crear su propia alternativa política. No existe ninguna opción electoral que represente y defienda los intereses de la clase trabajadora, los campesinos, sectores populares e indígenas, por ello, como una medida defensiva, la única alternativa que queda es votar nulo o no asistir a las urnas, como expresión de rechazo activo al antidemocrático sistema electoral y a los partidos políticos de la patronal.

En las últimas elecciones, el voto nulo ha cobrado legitimidad. Es una forma activa de protestar, reflejaría una elevación del nivel de conciencia de los ciudadanos quienes se toman el trabajo de ir a las urnas a anular su voto.

Por el fortalecimiento de la CCVN

En las pasadas elecciones presidenciales se conformó la Coordinadora Ciudadana por el Voto Nulo (CCVN), la cual logró incidir en el llamado al Voto Nulo. Nuevamente hacemos el llamado a personas, núcleos y organizativos de izquierda revolucionaria, organizaciones sindicales, sociales y políticas a integrarse a la CCVN, para lanzar una campaña masiva por el voto nulo a la vez que se trabaja en la conformación de una organización revolucionaria de izquierda que retome las banderas de los trabajadores y el pueblo salvadoreño.

Por una oposición de izquierda revolucionaria

Ha quedado demostrado en estos dos periodos de gobierno del FMLN, que este partido ya no es de izquierda, y que no representa los intereses de los trabajadores y las masas populares. Ninguno de los partidos en contienda representa tampoco los intereses de las grandes mayorías. Por ello, debemos trabajar en la conformación de una organización que represente y defienda los intereses de los trabajadores públicos y privados, los campesinos, los indígenas y demás sectores populares del pueblo salvadoreño.

Nadie nos representa: Votemos Nulo
Anulemos la corrupción: Anulemos el voto
Ninguno cumple: votemos nulo

Centroamérica, 10 de diciembre del 2018

Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ■

LAS CAUSAS REALES DE LA MIGRACIÓN

Por Libnny Espinoza

El Plan Alianza para la Prosperidad del "Triángulo Norte" (PAPTIN), auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, en 2014, contempla reducir la migración ilegal en Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello pretende contrarrestar la narcoactividad y violencia organizada sin reconocer las causas que la provocan. De este modo omite la falta de oportunidades, violencia y pobreza, que ponen en desventaja competitiva, a la mayoría de las personas migrantes que no logran generar ingresos suficientes para la subsistencia de sus familias, especialmente hondureñas. Ello obliga a buscar otras alternativas fuera del país, generalmente buscando el sueño americano, ante las inminentes amenazas que vale la pena reseñar.

Procesos

El 13 octubre de 2018 San Pedro Sula fue noticia mundial, una caravana migrante salía rumbo a EEUU, no sería la primera y tampoco será la última. Su travesía fue de Honduras a Guatemala, luego México con el fin de llegar frontera con EEUU. Muchos Centroamericanos se unieron en el camino a la caravana; representaba seguridad ante los peligros de ser secuestrados, golpeados, robados al hacerlo clandestinamente. También por las muestras de solidaridad que recibieron en todo el trayecto. Sin embargo, la actual caravana se encuentra en Tijuana haciendo trámite para un posible asilo en EEUU, otros miembros de la caravana no han deseado esperar el lento trámite migratorio por lo que han decidido abandonarla y seguir por cuenta propia el camino, desafiando a las autoridades migratorias al cruzar las fronteras sin permiso.

Existen una serie de sentimientos encontrados en la mayoría de los centroamericanos, tanto de los que van, como de los que somos espectadores de este fenómeno. Las muestras de solidaridad son latentes, pero también las de desprecio. Sin embargo, esta migración forzada tiene sus orígenes. Muchos se preguntarán: ¿Porque las personas huyen?

¿Qué está pasando en Honduras? Incluso los medios de comunicación hicieron creíble que se trataba de una "manipulación". Ya existen crónicas sobre su paso por Guatemala y estadía en México; solo quiero demostrar las circunstancias inmediatas que la hicieron posible en Honduras.

Entre las coyunturales encontramos desde las malas prácticas políticas y económicas (aceleramiento del modelo



neoliberal), el golpe de Estado del 2009, el fraude electoral. Entre las causas estructurales tenemos, pobreza, desempleo, una economía periférica en el mercado global, donde los mercados laborales están concentrados en determinados países. Todos ellos detonantes para huir de las precarias condiciones que se vive en Honduras.

Neoliberalismo

Desde la llegada de este modelo económico en los años 90' y su evolución histórica en Honduras, se ha concentrado en una serie privatizaciones de las empresas públicas entre ellos la salud y la educación, creando el subdesarrollo y dependencia al mercado internacional. Este modelo se ha agudizado después del 2010, creciendo en concesiones viales, marítimas y aéreas, concesiones a la energía eléctrica, mayor endeudamiento interno y externo, quitando toda intervención del Estado.

Golpe de estado

Otra de las causas coyunturales fue, con el intervencionismo de Estados Unidos en el golpe de Estado del 2009 perpetrado a Manuel Zelaya Rosales. Éste fue patrocinado por el ex presidente Barack Obama y su entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Ésta intervención ha

dejado años de retraso económico, político, apoyando regímenes antidemocráticos e ilegítimos, –como el del actual dictador Juan Orlando Hernández–, y ha profundizado la dependencia económica hacia este país del Norte; también ha empeorado las condiciones de vida de millones de hondureños. Este fenómeno ha creado retraso en la economía, desesperanza y falta de oportunidades dentro del país, por lo cual muchos deciden abandonarlo.

Pobreza

Honduras en los últimos años ha logrado crear nuevos pobres como lo ha citado el Instituto Nacional de Estadística, según su encuesta permanente de hogares del 2017, el 65.7 % de la población se encuentra en condiciones de pobreza durante las últimas décadas. El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH) señala que ha aumentado 1.5 % en los últimos años, pese a los programas del gobierno y su intervención millonaria en la creación de políticas públicas fallidas, en lugar de reducir la pobreza ha incrementado.

A su vez, los precios de la canasta básica se encuentran en uno de los más altos de Centroamérica, equivale a unos 352.3 dólares (8,326 lempiras), mientras la mayoría de la población gana un salario entre 270-420 dólares mensuales, con ello debe de cubrir, alimentación, vivienda, transporte y educación, muchas familias se las arreglan diariamente para poder subsistir en especial en las zonas rurales, que viven en pobreza extrema con menos de 1.90 \$ al día según el Banco Mundial en Honduras.

La siguiente gráfica muestra el salario mínimo en dólares a nivel nacional y por actividad económica. Por más empleo que pueda generarse, jamás lucharán contra la pobreza, las familias hondureñas no pueden sostenerse con estos salarios tan bajos, cuando apenas logran comprar la canasta básica, en otras palabras, en Honduras el empleo no reduce la pobreza.

Desempleo

Ha sido estudiado y demostrado que el causante del desempleo es el aceleramiento neoliberal y sus pésimas



prácticas en Honduras, generado más desigualdad en beneficio de un pequeño sector empresarial. Según las encuestas del INE deja evidenciado que el 7.4% de la población está sin empleo o está buscando un empleo, el resto 92.6% son trabajadores asalariados y no asalariados. Este 92.6% puede significar que Honduras está en mejores condiciones económicas y tiene la mayoría de hondureños empleados, pero no es así, en realidad el empleo en Honduras no mejora la condición económica de la población, por sus bajos y pésimos salarios, no logrando cubrir sus necesidades básicas haciendo caer en pobreza.

Por otro lado, existe en Honduras una exclusión de trabajo a los jóvenes, es decir que la población entre el rango de edades de 19 a 24 años es la más desempleada y afectada ya que no cuenta con experiencia laboral o está en busca de su primer empleo según encuestas del INE. Este es otro de los motivos para que la juventud esté más expuesta a migrar o integrarse a grupos delictivos por falta de oportunidades.

Violencia

Según la Amnistía Internacional, la impunidad y la inseguridad se ha radicalizado después de las protestas de noviembre de 2017. Las protestas se organizaron por la falta de claridad en las elecciones presidenciales, el gobierno de Juan Orlando Hernández utilizó las fuerzas especiales junto a la policía militar para reprimir a los manifestantes, dejando cientos de personas arrestadas, imponiendo toques de queda por 10 días y como si fuera poco causó la muerte a 31 personas.

Estas cifras convierten a Honduras en uno de los países más violentos y peligrosos para los defensores de los derechos humanos, especialmente a los defensores de la tierra y medio ambiente que corren peligro con las constantes compañías de intimidación y hostigamiento incluyendo constantes amenazas a muerte por parte del Estado.

Si bien el caso más conocido es la muerte de la ambientalista Berta Cáceres en marzo del 2016, en el que aún no se han penalizado a los actores intelectuales culpables de su muerte. Muchos otros son menos conocidos fuera del país, claro ejemplo de esto fue el pasado junio, cuando tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fueron objeto de un ataque armado cuando regresaban de una reunión en un vehículo, la mayoría de

estos atentados les causa la muerte y las investigaciones de los asesinatos quedan impunes.

Por otro lado, el aumento de muertes por violencia de género se ha incrementado, desde los meses de enero a octubre de 2018, el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) registró 236 muertes violentas de mujeres, sin olvidar que los hondureños se enfrentan a la violencia no solo por parte del Estado, sino por parte de maras y pandillas que operan en diferentes zonas del país.

Corrupción

Podría enumerar los constantes despilfarros de dinero por parte del actual régimen, desde los más ridículos como "Honduras actíivate", hasta los más peligrosos que han atentado contra la salud de los hondureños como ser el saqueo del Seguro Social en el 2014, el cual sigue impune. Otro de los latrocinios descarados fue la concesión a la empresa Vial COVI que hasta la fecha sigue saqueando dinero a los hondureños diariamente con los altos cobros del peaje; por último, la concesión de la energía eléctrica ahora Empresa de Energía Honduras, quien ha aumentado los cobros de energía eléctrica a la población más pobre del país. Según analistas, la administración pública está conducida por un sector de políticos que ha entendido el Estado como su negocio.

Todos estos factores han motivado a las personas a huir de la crisis humanitaria que se vive, otros prefieren pelear en las calles yendo a tribunales exigiendo justicia ante los constantes atropellos que se le ha causado a la población hondureña; tomando en cuenta que muchos han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados, exiliados y muertos por exigir justicia, otros mueren por la violencia de maras y pandillas que se mueve en las calles. Aquí no se puede vivir, sino te saquea el Estado, te saquean los grupos vandálicos. Mientras tanto el actual régimen orlandista menciona constantemente que "Honduras está Cambiando" lo cual está alejado de la realidad, mientras Honduras cada día se sumerge en la pobreza, violencia y desesperanza.

La caravana migrante es el reflejo de una sociedad hundida en la corrupción, que intenta sobrevivir ante las prominentes amenazas. Sé que los demás países Centroamericanos y del Norte tienen sus propios problemas y no están dispuestos a soportar "invasiones" como dicen, pero en realidad es momento de levantarse,

investigar, y luchar por los derechos en cada país y exigirle a EEUU –país que paradójicamente abandera las luchas contra la corrupción en Centroamérica y a la vez interviene de manera negativa apoyando elites corruptas, golpes de Estado, lo que nos hacen convulsionar como sociedad– su dimisión definitiva de nuestros países centroamericanos.

Conclusiones

El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ha fallado por haber recortado sus recursos enfocados al desarrollo social y dirigidos a la seguridad, cuando el objetivo original era lograr desarrollo económico y social, fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, pero 4 años más tarde, nada de eso ha sucedido, lo que explica por qué hoy la migración irregular ha empeorado. Lo anterior evidencia que el plan nunca tuvo como propósito principal el desarrollo de los pueblos.

La corrupción junto con la intervención norteamericana ha provocado que los flujos migratorios se intensifiquen, EEUU en parte es responsable de esta crisis y no dejan a Honduras tener una libertad política, económica o mantener su soberanía, usándonos como instrumento de experimento social y así mantenernos más dominados.

La caravana del 13 de octubre deja evidenciado la corrupción de la clase política y su poca preocupación por crear políticas públicas que garanticen estabilidad económica, políticas de las cuales pueden favorecer a la clase obrera del país, en la cual mejoren los salarios, haya una mejor cobertura de salud y educación en el país.

Frente a la problemática de Honduras, es un llamado no solo a la juventud sino a la población en general a seguir en la lucha, a cuestionar el sistema de Honduras, a mantener una presión constante para que la clase política entregue cuentas de la actual crisis humanitaria, exigiendo justicia a los constantes abusos contra la población hondureña. Esta es una causa que se debe seguir, tratando de educarnos, leyendo, informando y peleando en las calles. Por otro lado, tenemos el derecho de exigir la renuncia del actual presidente con todo su gabinete del Partido Nacional.

En fin, a Honduras le toca un largo recorrido y ardua lucha en contra la pobreza, los gobiernos venideros deben de impulsar políticas, convenios y alianzas que favorezcan a la población no solo al sector empresarial. ■

STISSS SE DEBATE ENTRE LA NECESIDAD DE CAMBIO Y EL CONTINUISMO

Por Juliana Castro

El viernes 14 de Diciembre del 2018 trabajadores organizados en el Sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) realizaron la 52 Asamblea General Ordinaria de la cual salió electa la planilla de la UNTRAC quienes serán los encargados de la dirección del STISSS para el 2019.

Estancamiento en prestaciones laborales y falta de condiciones

Actualmente existe un estancamiento y pérdida de prestaciones para todos los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) entre las que se encuentran falta de un verdadero aumento a los salarios, no existe una justa clasificación y remuneración económica para el sector profesional, agregado a ello existe una sobre carga laboral para el personal, lo cual impacta en la atención medico hospitalaria a todas las personas derechohabientes.

Fue lamentable la posición adoptada de no acompañamiento por la actual dirección del STISSS a la lucha del sector de trabajadores profesionales quienes se organizaron para demandar el reconocimiento al grado académico como licenciados a la vez que se les reclasifique y un pago digno conforme a su grado académico.

Por la unidad de todos los trabajadores

Al hablar de trabajadores es oportuno aclarar que trabajadores somos todos independientemente el grado académico y que las actividades o funciones realizadas por cada uno es importante para brindar una atención medico hospitalaria oportuna y eficaz. Pero también se debe reconocer a los trabajadores profesionales que pasaron por un estudio académico quienes merecen un justo pago.

Actualmente la clase trabajadora en el ISSS se encuentra atomizada, esta situación debe cambiar ya que dicha atomización es utilizada por la patronal a su favor, lo cual impide una correlación de fuerza en el momento de la lucha, ejemplo en el momento de la negociación del Contrato Colectivo

de Trabajo en donde se necesita hacer presión para exigir mejores prestaciones laborales y económicas.

Por la independencia de clase

La dependencia política de las direcciones sindicales limita la lucha por mejores prestaciones laborales y económicas, por lo cual se debe exigir a los representantes sindicales una verdadera independencia de clase respecto a los partidos políticos del régimen.

Al depender el sindicato de un partido político si este es quien gobierna, el sindicato obedece al partido; no le exige y no lucha. Si dicho partido no está en el gobierno la dirección sindical por orden del partido instrumentaliza las luchas de los trabajadores y las convierte en acciones de presión para obligar a negociaciones interpartidarias, desnaturalizando así las luchas sindicales. Debemos exigir la independencia política de las direcciones sindicales y que el único interés que debe prevalecer es la defensa y garantía de los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores decidieron

En el proceso de elecciones realizado el pasado 14 de diciembre participaron dos colectivos: SOMOS STISSS liderado por el Licenciado Adrian Reyes y el colectivo UNTRAC liderado por Armida Franco. Saliendo ganador el colectivo UNTRAC con 1252 votos mientras la planilla del colectivo SOMOS STISSS obtuvo 887 votos a la vez existieron personas que se expresaron votando nulo los que hicieron un total de 38 votos así mismo es de recalcar el ausentismo de las bases sindicales.

El colectivo UNTRAC continua en la dirección, estos años de gobierno lo han llevado a un desgaste natural lo que se traduce en un descontento y cuestionamiento a nivel de las bases lo cual se reflejo en los resultados. En sus gestiones ha existido un estancamiento y perdidas de ciertas prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo las cuales se ven amenazadas, aunado a ello está la apatía a abanderar luchas y demandas de sectores específicos como el caso del

sector profesional, lo cual reafirmaron nuevamente después de conocer los resultados.

Defendamos la democracia obrera

A nivel del régimen interno la dirección de la UNTRAC han venido realizando prácticas contrarias a los principios de la democracia obrera expulsando de manera selectiva a trabajadores sindicalizados que han participado en colectivos opositores en las elecciones internas sin haber respetado el debido proceso, ante cualquier acto represivo se debe estar apresto a defender la democracia.

En esta Asamblea General Ordinaria del 2018 existieron ciertos elementos cuestionables como fue no querer permitir representación del colectivo SOMOS STISSS en la comisión de escrutinio lo cual fue posible mediante la presión de las bases logrando obtener la participación de una miembro en dicha comisión a la cual no se le permitió expresarse y fue agredida por miembros de la planilla ganadora.

Otro hecho a destacar es la negativa a permitir representantes del colectivo SOMOS STISSS en las mesas de votación, lo cual lograron mediante la presión de las bases.

Por la unidad de todos los trabajadores del ISSS

SOMOS STISSS, logro unificar los diferentes colectivos y sectores lo cual se mostro en los votos obtenidos a pesar de no haber ganado las elecciones se debe continuar trabajando en la unidad de mas colectivos, así mismo apoyar las luchas por un aumento de salario digno para todos los trabajadores y continuar acompañando las lucha y las demandas del sector de trabajadores profesionales.

No permitamos que nos dividan somos una sola clase, luchemos en unidad de acción para defender nuestros intereses como clase trabajadora. ■



LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONTRALOR Y LA DISPUTA POR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Por Leonardo Ixim

Nuevamente el sistema de Comisiones de Postulación y la elección de segundo nivel de un funcionario, en este caso de la Contraloría General de Cuentas (CGC), genera suspicacias debido a la importancia del cargo y a los intereses que despierta el control esta institución.

El sistema de Comisiones de Postulación fue impuesto en las reformas constitucionales de 1994, que buscaba que expresiones de la sociedad civil como los colegios de profesionales, universidades privadas y la única universidad pública, la Universidad de San Carlos (Usac), participaran pre seleccionando una lista a modo de filtro para que lo eligiera finalmente el Congreso de la República. Fue una forma de aparentar menor concentración de poder, pero en la práctica se volvió una disputa entre camarillas cercanas a las distintas fracciones de las clases dominantes.

De tal forma que distintos grupos de interés se disputan el control en colegios de profesionales y facultades de universidades, los cuales se nutren de profesionales que laboran en instituciones públicas, convirtiéndose en parte del engranaje burocrático, donde se reproducen tales grupos y se vuelven puente para reproducir los intereses materiales de las distintas fracciones y élites de las clases dominantes. De esta manera forman un aparato de burócratas (técnicos, profesionales, empleados y funcionarios) para enraizar al Estado en la sociedad y viceversa, en función de la dominación de la burguesía.

La comisión de postulación para elegir al Contralor General de la Nación está conformada por un representante de los rectores de las universidades del país, que en este caso fue Félix Serrano de la Universidad Mesoamericana

(privada) quien la presidió, los rectores de las universidades que incluyen las carreras de auditoría y contaduría pública (participaron 11 universidades no todas ellas con estudiantes en esas carreras), mas un número equivalente de representantes electos los cuales se dividen de acuerdo al número de colegiados inscritos en el



Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores (CECPAA), y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA); los cuales tienen siete comisionados y cuatro respectivamente.

La Comisión de Postulación entregó al Congreso de la República la nómina final de seis integrantes siendo estos: Jorge Enrique Dávila Martínez, Carlos Humberto Echeverría Guzmán, César Armando Elías Ajcá, Alejandro González Portocarrero, Edwin Humberto Salazar Jerez y Vilma del Rosario Xicrá Tahay. El Congreso, debido a que ya entró en vacaciones y la comisión permanente del legislativo que podría convocar a una sesión extraordinaria -el periodo para elegir contralor ya terminó- debido a que varios diputados buscan su reelección o por lo menos hacer campaña por algún otro, no realizará la nominación final y se presume que será en enero.

Por su parte mucho se habló de los intereses de los participantes y quienes quedaron en lista final, vinculados algunos a la ex contralora

Nora Segura y al todavía en funciones Carlos Enrique Mencos quien está en su segundo mandato y recientemente fue nominado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para un cargo de elección popular, creando mas suspicacia en este proceso. Pues al final siguen siendo los partidos políticos representados en el Congreso, donde tanto los gubernamentales como los de la oposición -la UNE por ejemplo- tienen intereses de cara a ganar las elecciones del año próximo y que no existan evidencias ni procesos de auditoría, ni penales contra ellos.

Durante el proceso, los finalistas fueron impugnados en la misma postuladora, pero igual al puntuar alto fueron nominados para esta lista. Por su parte un ciudadano -Juan Pablo Muñoz- y otros, pusieron un amparo ante un tribunal ordinario por la falta de publicidad en el proceso de pre-selección de esta comisión, situación que aún no ha sido resuelta y que fue calificado en la postuladora de que esta acción no es legítima porque a estas personas no les incumbe el proceso, como si cualquiera no pudiera vincularse y observar tal proceso.

Los discursos de los finalistas giran alrededor de los mismos tópicos, la lucha contra la corrupción, el papel de la Contraloría para fiscalizar vía las auditorías previas a las instituciones y auditorías forenses -cuando se han ejecutado los fondos- o el famoso finiquito entregado por esta dependencia a los candidatos que participen en las elecciones en esta coyuntura electoral que se abre y otros temas. Pero la revisión y el papel real de tal institución, cuyo cargo directivo debería ser electo por el pueblo solo será discutido en una Asamblea Constituyente Popular y de los Trabajadores. ■



FRANCIA EN CRISIS: LA REVUELTA DE LOS “CHALECOS AMARILLOS”.

Por Antonio Renard

Las imágenes de los últimos fines de semana, donde los chalecos amarillos, nombre de un colectivo ciudadano que llamó a partir del 17 de noviembre a protestar contra los recientes aumentos en el impuesto a los carburantes, especialmente el diesel, han tomado las portadas de los diferentes noticieros. París, la ciudad de la luz, esta vez no brilla por la torre Eiffel si no por los vehículos de la policía y otros que han sido incendiados luego de los enfrentamientos entre los CRS y los manifestantes.

Esta ola fluorescente se ha esparcido a lo largo y ancho del hexágono pero también ha llegado hasta Bélgica, en la región valona al sur del país. Todas las fuerzas políticas y sindicales han sido tomadas por sorpresa debido a que pensaron que no pasaría de un simple plantón. Pero la dinámica de la lucha ha sobrepasado por su fuerza y por los métodos combativos cualquier proyección simplista del asunto. Su consigna, la dimisión de Macron, que antes de estos incidentes se encontraba ya en una situación de fragilidad en los sondeos de opinión, por debajo de Hollande en la misma época.



¿Esta nueva ola de protestas, será la vencida?

Desde hace un poco más de un quinquenio, una serie de manifestaciones, huelgas y otros movimientos sociales han tratado de enfrentar a la deriva neo liberal de los gobiernos de turno. En el 2012, el presidente Sarkozy fue derrotado en las urnas y la elección de François Hollande generó una enorme expectativa en las masas, luego de haber utilizado un discurso izquierdoso durante la campaña presidencial. El anuncio del impuesto

a la fortuna y otros más quedaron en el tintero o fueron convertidos en simples recordatorios moralistas. Por el contrario, el gobierno de Hollande, junto con su flamante ministro de finanzas Macron avanzaron en una ofensiva en contra de los trabajadores y el pueblo. La ley el Khomri puso fin a una serie de derechos adquiridos por la clase trabajadora que vinieron a ser rematados por la reciente reforma del código de trabajo impulsada por la actual administración.

A la par de esto, siguiendo el dogma neo liberal, la reforma fiscal hizo que los impuestos para los ricos disminuyeran en un equivalente de 4,5 millardos de euros. Un hueco en las finanzas públicas que no tienen forma de recuperarse por otro mecanismo. En resumen, un regalo a los ricos

sectores de la población que empezaron también por medio de las redes sociales a intentar organizarse. El ejemplo de “on vaut mieux que ça” (valemos más que eso) denunciaba las condiciones de sobre explotación que padecen los trabajadores jóvenes sub pagados o víctimas de prácticas abusivas en las empresas. La “Convergencia de luchas” también apareció en el mismo periodo. Las asambleas ciudadanas en las plazas de las principales ciudades del país trataron de organizar el descontento. La reacción del entonces primer ministro Manuel Valls fue brutal. Los jóvenes y demás participantes fueron desalojados manu militari.

Además de los elementos antes citados, la participación de la militancia sindical no fue para impulsar la lucha si no más bien para contenerla y tratar de cooptarla burocráticamente. La división entre los luchadores tuvo un efecto nocivo para el movimiento y creo desconfianza en las bases que salieron a luchar. La burocracia sindical jugó una vez más su rol traidor a los intereses de la clase trabajadora.

La huelga de los ferroviarios también fue una gran oportunidad desperdiciada por la dirigencia sindical y por La France Insoumise liderada por Mélenchon, tercer partido más votado en las elecciones

del 2017. y poderosos del país. Un ataque también al monto de las pensiones vía la combinación de dos mecnos, el aumento de la CSG (contribución social general) y el congelamiento de los aumentos de las mismas, ha dado un duro golpe a este sector de la población. Entonces podemos ver en dónde comienza a apretar el zapato.

Durante la administración Hollande, los intentos para criminalizar la protesta mediante la utilización de la ley anti terrorismo dio sus frutos. La represión de los estudiantes que conformaron el movimiento Nuit Debout junto a otros

del 2017. Al mismo tiempo que los trabajadores de la SNCF, la empresa estatal de los ferrocarriles, empezaban la huelga, los estudiantes universitarios empezaban una huelga con toma de sedes universitarias en casi todo el territorio para oponerse a las nuevas restricciones para el acceso a los estudios superiores. Los primeros se oponían a la reforma del estatuto de los trabajadores y a la privatización de varias líneas del ferrocarril, al mismo estilo que la realizada en Inglaterra en los años ochenta.



Ambos movimientos fueron derrotados por la ausencia de unificación de las luchas, muy a pesar que en las bases esa necesidad de unidad de acción fue expresada muchas veces por medio de asambleas y piquetes conjuntos sobre todo cuando las fuerzas represivas del régimen empezaron a atacar a los estudiantes para desalojarlos de las sedes. La LFI se caracterizó por llamados huecos y por manifestaciones esporádicas en algunos lugares para lanzar la figura de Mélenchon como primer opositor al gobierno, pero sin llamar a la huelga general. Una lenta agonía hizo que el movimiento se desvaneciera pese a la resistencia heroica de los trabajadores del ferrocarril.

Estos aspectos son importantes para entender el marco actual de las cosas y porqué también la desesperación de miles de miles de franceses se traduce en estas manifestaciones.

Al momento de escribir estas líneas, el gabinete se reúne de emergencia para analizar la situación. Macron recién entrado de la cumbre del G20 en Argentina fue a visitar los daños en el arco del triunfo, no sin ser acompañado de un coro de transeúntes que le pedían su renuncia. Tal y como lo dice el presidente del senado, Gérard Larcher, que el gobierno "no puede permitirse un tercer sábado negro".

Los chalecos amarillos, lejos de la caricatura, la realidad de los testimonios

El detonante de toda esta bronca ha sido el aumento del impuesto a los carburantes como se ha mencionado antes. Los más afectados son un sector de la población que debe movilizarse en vehículos, principalmente diesel, que han visto cómo los precios se dispararon con el argumento de la transición ecológica. Este argumento falaz esconde varias cosas. En un primer lugar oponer a las medidas ecológicas contra el cambio climático a la población en general.

Al contrario de los Estados Unidos (el país más energívoro del planeta) la UE orientó el consumo del diesel para la flota vehicular. Luego, los expertos "descubrieron" que dicha apuesta creaba muchos problemas de salud ligados a la emanación de partículas finas. La orientación cambia ahora para favorecer los vehículos que consumen

gasolina que, estos a la vez aumentan la cantidad de CO2 y posteriormente, una vez que la industria automotriz así lo acepte, pasar a los vehículos eléctricos, que tienen otras consecuencias nefastas para el ambiente como por ejemplo la composición de las baterías y otras partes del motor. Los escándalos de los engaños de los tests en que se han visto envueltos los gigantes de la producción automotriz como VW y los otros que le han seguido dejan entredicho las verdades argüidas por los gobiernos de la UE para combatir el cambio climático. Las medidas restrictivas para impedir la circulación de ciertos modelos contaminantes castigan fundamentalmente a los que menos ingresos tienen.

Por otro lado, el recorte de presupuesto en los transportes públicos ya sea a nivel nacional como a nivel regional, dejan a muchos trabajadores presos de estos aumentos y golpean a la categoría de más bajos salarios. Dentro la lógica neo liberal del gobierno, las compañías que más contaminan como la aeronáutica se ven exentos de impuestos para el "fuel" de los aviones. Los gigantes petroleros como Total, por ejemplo, también pagan sumas ridículas. Otra vez más, Macron se ciñe con los trabajadores y el pueblo.

Estos gilets jaunes expresan en su mayoría que, a mediados de mes, sus cuentas están ya en rojo. Muchos viven con salarios mínimos o de empleos mal pagados. Este aumento de los combustibles representa un duro golpe a sus bolsillos. La planificación urbana en la periferia y las zonas rurales hace que los pobladores tengan que hacer grandes recorridos en sus vehículos particulares. Bajo la consigna de la rentabilidad, médicos, bancos, comercios han desertado los pueblos para aglomerarse en centros urbanos con mayor población.

Este costo que han disminuido por un lado se ha trasladado a los usuarios que, antes la poca frecuencia de los transportes públicos (también recortados por aspectos de "rentabilidad") no tienen otra alternativa que utilizar el vehículo para todos los desplazamientos. Los anuncios del gobierno para dotarles de primas para poder cambiar de carro no llegan a satisfacer las necesidades, es una simple medida demagógica ya implicaría un nuevo crédito a cargo de los trabajadores que ya no pueden

más.

Algunos de los elementos dentro de los "chalecos amarillos" pertenecen a partidos de la extrema derecha. Pero como en varios poblados, cuando han querido ponerse como interlocutores de estos, las bases los han sacado y no aceptan su discurso xenofóbico al querer poner en la palestra el problema de la migración como el número uno. Por otro lado, algunos de los académicos y miembros de la inteligencia critican a estos luchadores por la "falta de claridad". En algunos centros urbanos, las asambleas de luchadores han expresado una gran claridad sobre las causas del problema, los recortes presupuestarios y la negativa para que el país se transforme como lo pretenden Macron y los liberales de todo cuño en un modelo social a la estadounidense o inglés donde las conquistas sociales han borradas por la ofensiva conservadora de los últimos treinta y pico de años.

¡Abajo el gobierno de Macron! Que la crisis la paguen los ricos!

El llamado de los luchadores es claro: "Macron démission". Como ministro primero y como presidente después, ha demostrado que su proyecto es para que crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. Por otro lado, los regalos a los multimillonarios y los grandes empresarios no terminan.

El silencio de las centrales sindicales es un mal síntoma y busca salvaguardar el status quo. Las bases de los sindicatos deben presionar a las cúpulas para que se organicen asambleas democráticas y poder converger con la lucha de los chalecos amarillos. La violencia social impuesta por Macron y los neo liberales puede ser detenida.

Por otro lado, las bases de LFI debe llamar también a profundizar la lucha y ponerse al servicio de la misma. No bastan con discursos interminables en el parlamento para que la correlación de fuerzas cambie.

La unidad internacional es también muy importante. Los chalecos amarillos belgas y franceses deben unir las fuerzas para enfrentar a los mismos enemigos a ambos lados de la frontera. Michel y Macron representan lo mismo para la clase trabajadora en ambos países. ■

20 DE DICIEMBRE DE 1989: LA ÚLTIMA INVASIÓN YANQUI A PANAMÁ

Por Olmedo Beluche

Veintinueve años han transcurrido desde la aciaga medianoche del 19 al 20 de diciembre de 1989. Aún los muertos gritan en silencio contra el olvido, exigiendo que sus nombres sean pronunciados y pidiendo justicia. La quinta parte de un siglo ha pasado y todavía el pueblo panameño desconoce cuánto daño nos hicieron. Como muchos otros crímenes en este país, los hechos siguen sin esclarecerse del todo, sin investigación judicial, sin proceso y sin castigo.

A la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989 le pasa lo mismo que al 3 de Noviembre de 1903: la clase dominante panameña mantiene en la oscuridad el acontecimiento, mientras que los amanuenses intentan imponernos un balance histórico que es diametralmente opuesto a la verdad. Ellos pretenden que el acto más cruel y sanguinario de sojuzgamiento de la nación panameña por el imperialismo norteamericano sea recordado "como una liberación", en palabras del ex arzobispo Marcos G. McGrath, tal y como han logrado, con cierto éxito, respecto a la separación de Panamá de Colombia en 1903, pasando como "independencia" el acto que nos convirtió en colonia.

La evaluación histórica de la invasión puede ser abordada desde dos perspectivas, la de los objetivos del invasor y la de las víctimas, la de Estados Unidos y la de la mayoría de la nación panameña.

Como ya hemos indicado en el capítulo VI de nuestro libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), hay que distinguir entre los objetivos manifiestos por el gobierno norteamericano y los objetivos reales.

Sería ingenuo aceptar a priori los argumentos del ex presidente George

Bush padre, en el sentido de que se invadió a Panamá para "garantizar la vida de los norteamericanos y la seguridad del Canal", o que se buscaba traernos la "democracia" y sancionar al "narcodictador" Manuel A. Noriega. Creer ese argumento es tan pueril como dar por hecho que se invadió Irak en 2003 por las inexistentes "armas de destrucción masiva", como sostuvo George W. Bush en su momento. Probablemente mentirosos y criminales tanto el hijo como el padre.

En el citado libro sostenemos que la prueba fehaciente de que el objetivo norteamericano no era "liberarnos" del dictador, fue que el 3 de Octubre de 1989, cuando Moisés Giroldi y un grupo de oficiales dio un golpe de estado y arrestó a Noriega, ofreciéndoselo a Estados Unidos, las tropas del Comando Sur se hicieron los desentendidos y con desprecio miraron para otro lado.

A nuestro juicio, la Invasión del 20 de Diciembre de 1989 no se entiende sin examinar los acontecimientos dramáticos ocurridos en Panamá durante la década de 1980, los cuales podemos resumir en que:

1. A partir de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, 1977, se pactó entre Estados Unidos y los militares panameños un proceso de democratización controlado y paulatino que debía culminar en 1984 con elecciones presidenciales. Este proceso se inscribía claramente en la política exterior norteamericana diseñada por James Carter de imponer regímenes parlamentarios o presidencialistas como mejor forma de dominación que las dictaduras militares impuestas en la década anterior, ya que algunas de ellas habían derivado en revoluciones como en Irán y Nicaragua. A partir del Consenso de Washington estos regímenes combinaron "democracias" muy restringidas con la aplicación de una drástica política económica neoliberal de desmonte del "estado de

beneficio".

2. El proceso panameño de democratización se fue complicando por dos vías: la muerte (accidental o no) del General Omar Torrijos, en julio de 1981, condujo a una lucha por el poder entre la oficialidad de la Guardia Nacional; y una resistencia social creciente contra las políticas neoliberales que se intentaron imponer. De manera que, hacia 1984-85, con el gobierno nacido del fraude electoral impuesto en acuerdo (subrayo), entre la Guardia Nacional panameña y EE UU, del presidente Nicolás Ardito Barletta, estalló con fuerza la crisis social y política que derivó en la invasión.

3. Entre 1981 y mayo de 1989, el General Noriega fue el aliado privilegiado de Washington, recibiendo respaldo político y militar para elevar a la Guardia a un Ejército moderno, a cambio de aplicar en Panamá las políticas de privatización y deuda externa impuestas por los organismos financieros. Es la explosión de luchas populares contra el gobierno de Barletta la que lleva a la crisis del acuerdo entre ambos. Pero la ruptura entre EEE UU y Noriega no se da hasta febrero de 1988 y, aún así, no es sino hasta el fracaso de las elecciones de mayo de 1989, cuando el Pentágono se decide a deshacerse de Noriega en busca de un régimen político estable.

Por consiguiente, el objetivo primario de la invasión para EE UU era establecer en Panamá un régimen político estable que, con apariencia democrática, que garantizara la aplicación de las políticas neoliberales que eran su prioridad, al estilo de lo que se hizo en México con Salinas de Gortari, en Perú con Alberto Fujimori y en Argentina con Carlos Menem.

Este objetivo quedó patentado en que, pocos meses después de la invasión, julio de 1990, el gobierno norteamericano hizo firmar a Guillermo Endara el llamado Convenio de



Donación, por el cual se darían algunos millones de "ayuda" económica a cambio de la aplicación de un estricto plan de liberalización y privatización dictado por el FMI y el Banco Mundial, como señala el propio texto del convenio.

Desde este punto de vista, político y económico, hay que decir que EE UU ha tenido éxito con lo que se propuso en la invasión. La apariencia democrática del régimen ha permitido aplicar a fondo el esquema neoliberal a los sucesivos gobiernos de Endara, Pérez Balladares, Moscoso y Martín Torrijos. Y no es sino hasta las elecciones de 2009, cuando este régimen y estas políticas han empezado a mostrar ciertas fisuras, influidas por la debacle mundial del modelo neoliberal.

Señalábamos, en nuestro libro ya citado, publicado en 1994, que otro de los objetivos podría estar relacionado con la reversión del Canal a manos panameñas y el cierre de las bases militares a partir del año 2000. En este aspecto, diera la impresión que nos equivocamos, pues las bases militares se cerraron y el canal revertió como estaba establecido en el Tratado Torrijos Carter.

Sin embargo, a favor de nuestro argumento debemos aducir ahora que el gobierno norteamericano retiró sus tropas a inicios del siglo XXI, como estaba pactado, tomando ciertos resguardos: una reforma constitucional y una ley orgánica que convirtió la administración del canal en una "zona" bajo un régimen en el que tienen más control los usuarios (el principal sigue

siendo EE UU) y las élites financieras, que el pueblo panameño.

En el tema de las bases militares, es conocido el intento fallido de mantener la base de Howard bajo el esquema de "combate al narcotráfico" (CMA), pero luego este déficit fue corregido con acuerdos de seguridad, como el Salas-Beker, que autoriza a unidades militares norteamericanas la custodia de nuestros mares y nuestras fronteras.



Hasta que ahora, en la segunda mitad de 2009, en el marco de la instalación de siete bases militares en Colombia, el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli ha iniciado la instalación de cuatro bases militares en territorio panameño (podrían llegar a once, según el ministro José Mulino) con financiamiento y asesoría norteamericana.

Desde la perspectiva de las víctimas, reiteramos lo dicho en nuestro libro La verdad sobre la invasión: "En una sola noche las tropas norteamericanas asesinaron 100 veces más panameños que en 21 años de régimen militar. En una sola semana se hicieron 100 veces más prisioneros políticos que los que hubo durante los 5 años de régimen norieguista".

Pese a la ausencia de una investigación oficial, la Iglesia Católica pudo reunir los nombres de cerca de 500 asesinados, la mayoría de ellos civiles.

Las fosas comunes de El Chorrillo, Corozal, Arco Iris y Chepo siguen sin abrirse. Personas que perdieron sus hogares esa noche, entre 18 y 20 mil. Organismos de derechos humanos cuantificaron los heridos en, al menos, dos mil. Algo que muchos ignoran es que se hicieron cerca de 5,000 arrestos políticos. Las pérdidas materiales, en especial del estado panameño, siguen sin sumarse, aunque la Cámara de Comercio cuantificó las suyas en 400 millones de dólares, sin considerar dos años de sanciones económicas que hicieron retroceder el PIB en -16%.

Veinte años después, cuando parecía que iba a hacerse algo de justicia a través de una ley aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2007, para

establecer el reclamado Día de Duelo Nacional y una Comisión Investigadora, ésta fue vetada posteriormente por el presidente Martín Torrijos, sin que los diputados proponentes hayan intentado imponerla por insistencia.

En conclusión, hasta ahora, el balance histórico sigue siendo favorable para los victimarios y desfavorable para las víctimas. En espera de que, más temprano que tarde, una nueva generación de panameños y panameñas logre un gobierno que reivindique la memoria de los mártires del 20 de Diciembre, nuestra pequeña contribución a la justicia que reclaman los muertos estriba en que se conozca la cruda verdad de los hechos. ■



8 MESES DESPUÉS: LA DICTADURA ORTEGA-MURILLO SE AFERRA AL PODER, TRUMP IMPONE SANCIONES.... ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Han transcurrido más de 8 meses, desde aquel 19 de abril del año 2018, cuando el gobierno Ortega-Murillo decidió masacrar la protesta estudiantil, provocando un masivo levantamiento popular que estuvo en condiciones de imponer un cambio de gobierno. Muchos acontecimientos importantes han ocurrido en estos meses. El cambio de la situación, el aplastamiento de la insurrección desarmada, puede hacernos olvidar las principales lecciones de estas gloriosas jornadas de lucha.

1.- Estallido social y ofensiva revolucionaria de las masas

En ese momento, después de soportar durante 11 años un régimen bonapartista que se transformaba rápidamente en una dictadura, finalmente las masas rompieron las cadenas de la opresión y estaban a la ofensiva, mientras la dictadura se colocaba a la defensiva. De repente se abrió una situación revolucionaria en donde estuvo a la orden del día el problema de quien detentaría el poder.

En las calles, la mayoría de la población exigía la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, reflejando una creciente radicalización de la clase media y los sectores populares. Las marchas contra el gobierno agrupaban a decenas de miles de manifestantes enardecidos.

1.1.- La ACDJ y el Dialogo Nacional: el fracaso del "aterizaje suave"

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) antiguos aliados estratégicos del gobierno Ortega-Murillo, dieron un

bandazo, se pasaron a la oposición, y temerosos de ser desbordados por el movimiento de masas, impulsaron la creación de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) con algunos sectores de la sociedad civil y diversas organizaciones estudiantiles que fueron creadas al calor del estallido social.

El principal propósito de la ACDJ



era imponer una negociación política al gobierno Ortega-Murillo, a través de un Dialogo Nacional, con el objetivo de lograr el llamado "aterizaje suave", es decir, la salida voluntaria del matrimonio presidencial, para convocar a elecciones anticipadas y que todo volviese a la normalidad. En pocas palabras, lograr la transición hacia un sistema político basado en las instituciones represivas del orteguismo, pero sin la odiada figura de la pareja presidencial.

Presionado por la movilización en las calles, el gobierno Ortega-Murillo accedió a convocar al Dialogo Nacional, aceptó que la Iglesia Católica fuese la mediadora, realizó todo tipo de maniobras para ganar tiempo, esperando señales de cansancio de las masas.

Pero el "aterizaje suave" fue abortado, no tanto por la obcecación de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se resistían a hacer concesiones, sino por la movilización de masas

que impidió la concretización de los acuerdos secretos entre la dictadura y los principales grupos económicos y la oligarquía financiera y bancaria.

1.2.- El rol de dirección de los movimientos sociales

Tras 11 años de control absoluto sobre la sociedad, el régimen bonapartista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo habían establecido las bases de una dictadura dinástica, ilegalizando a los partidos políticos opositores, destituyendo a sus diputados, sino que había mantenido arrinconados a los movimientos sociales, con las únicas excepciones del movimiento campesino anti canal y de algunos movimientos feministas, los que había logrado desarrollar importantes movilizaciones.

El estallido social o insurrección de abril generó un amplio proceso de auto organización de las masas, especialmente del sector estudiantil, que durante décadas había estado bajo el control absoluto de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria (UNEN).

Antes de abril se había conformado discretamente la Articulación de Movimientos Sociales (Articulación), que agrupaba a la mayoría de ONGs y movimientos sociales. Ante la ausencia de sindicatos de trabajadores beligerantes, y de la inexistencia de fuerzas y grupos de izquierda, el vacío de dirección fue llenado por los movimientos sociales. Una parte de este vigoroso proceso de autoorganización fue captado por los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, pero la mayoría de estos movimientos sociales, engrosados con la movilización popular, se organizaron alrededor de la Articulación, que se convirtió en los hechos en la dirección de las movilizaciones que tumbaron el



“aterrizaje suave”.

En este proceso de fortalecimiento de la Articulación, debemos anotar que los aparatos de los ONGs fueron rebasados por el refrescante proceso de auto organización de las masas en los territorios y en los diversos sectores sociales. Este espontaneo proceso de autoorganización de las masas encerraba, no obstante, una enorme debilidad: carecía de una dirección centralizada. Por su propia naturaleza, los movimientos sociales no son conspirativos ni centralizados, características que se convertían en debilidad al momento de enfrentar al aparato represivo de la dictadura orteguista.

Con todas las cualidades y debilidades anotadas, la Articulación no solo se convirtió en el aglutinante del proceso de auto organización de las masas, sino también el objetivo principal de la represión de la dictadura.

1.3. El aplastamiento de la insurrección desarmada

La instalación del Dialogo Nacional fue una maniobra distractora de la dictadura. Duro solo un mes, del 16 de mayo al 16 de junio. El inicio del Dialogo Nacional coincidió con un proceso de establecimientos de tranques (barricadas en las carreteras y caminos) y con barricadas en las principales ciudades.

Los meses de mayo y junio reflejaron el proceso culminante de una insurrección popular desarmada, que se enfrentaba sin armas al aparato represivo de la dictadura, y que tenía como únicas armas los morteros caseros, los tranques y barricadas, que llegaron a semiparalizar la economía.

En la medida en que se acrecentaba la represión, los tranques y barricadas se convirtieron en el baluarte de la insurrección. La autoorganización popular giraba en torno a la defensa de los tranques y barricadas. Las ciudades o barrios liberados se defendían con tranques y barricadas. Este proceso reflejó un incipiente poder dual que no llegó a desarrollarse ni centralizarse, ni a convertirse en una Junta de Gobierno

Provisional, por la ausencia de una dirección revolucionaria que orientara a las masas. Incluso, en muchos casos la realidad obligó, a pesar del discurso pacifista de la ACDJ, a la creación de milicias de autodefensa, pero no llegaron a generalizarse. La destrucción



de estos embriones de poder dual, junto con tranques y barricadas, se convirtió en una prioridad para la dictadura.

La terminación del Dialogo Nacional el 16 de junio, marcó el inicio de la contraofensiva militar de la dictadura orteguista contra la revolución desarmada y los tranques y barricadas. Durante un mes, hasta proclamar su victoria militar en la celebración del 19 de julio, Daniel Ortega dirigió a las tropas especiales de la Policía Nacional, apoyados por grupos paramilitares encapuchados, en el proceso de aplastamiento militar y recuperación gradual de los pueblos y ciudades insurrectos, masacrando a quienes ofrecían resistencia. El objetivo era claro: destruir a balazos las expresiones de poder dual en los pueblos y ciudades.

El resultado de dos insurrecciones, la primera que fue reprimida en abril, y la segunda que se desarrolló posteriormente entre mayo y junio, y que fue aplastada militarmente entre junio y julio, fue de más de 500 muertos, más de 2,000 heridos y centenares de desaparecidos.

1.4.-Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea cerraron los ojos

Mientras duró la fase de ascenso revolucionario de las masas, la actitud del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la Unión Europea

(UN) fue de condenar la represión y llamar al Dialogo Nacional. Las declaraciones de condena fueron subiendo de tono conforme se conocieron los resultados oficiales de la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), pero en este periodo, cuando más se necesitaron acciones reales que debilitasen a la dictadura orteguista y evitasen la masacre, ningún gobierno se atrevió a romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, todos se negaron a que las sedes diplomáticas diesen asilo a los activistas perseguidos.

Todos los gobiernos del mundo apostaron a que la dictadura terminaría aceptando la auto reforma del régimen político y que tarde o temprano se materializaría la negociación política, pero al darle un margen de tiempo a la dictadura, permitieron en los hechos que esta aplastase militarmente a la insurrección desarmada, creando un cambio en la correlación de fuerzas.

Un dato alarmante de este periodo es que mientras la dictadura asaltaba militarmente a los tranques y barricas, los grandes contribuyentes (grandes grupos económicos) siguieron pagando puntualmente los impuestos, y con ello contribuyeron a que la dictadura tuviese los fondos necesarios para pagar los salarios de las tropas policiales y los grupos paramilitares.

En los hechos, no en los discursos, los gobiernos del mundo coincidieron con los grupos económicos de Nicaragua, en la necesidad de evitar el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista. Todos, sin excepción, desee diferentes puntos de vista, temían profundamente a que se repitiese un triunfo revolucionario como el ocurrido el 19 de julio de 1979.

1.5.- Una oportunidad perdida.

Las posibilidades reales de que se produjese el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista, estuvieron presentes durante los meses de mayo y junio, el momento más álgido de la movilización popular, cuando la dictadura estaba acorralada. Las ilusiones que la ACJD mantuvo en el Dialogo Nacional, le dio el tiempo necesario a la dictadura para



recuperar el aliento.

En la fase de ascenso revolucionario, los empresarios del COSEP, AMCHAN y FUNIDES fueron muy prudentes. Presionados por las masas, fueron obligados a convocar a paros nacionales de un solo día, verdaderos lockouts. En total hubo 3 paros nacionales: miércoles 13 de junio, viernes 13 de julio y viernes 7 de septiembre. Los dos primeros paros fueron convocados en momentos de ascenso, pero el último ya fue convocado en el periodo de resistencia, cuando la dinámica de las masas tendía a disminuir.

Debido a la ausencia de una dirección revolucionaria, reconocida por las masas (como lo fue el FSLN en 1979), los paros nacionales se diluían en la nada. En la etapa de ascenso revolucionario, la convocatoria a un paro nacional indefinido, una verdadera huelga general, hubiera cambiado radicalmente la situación, en los momentos en que la dictadura estaba a la defensiva.

Y vino lo inevitable: el aplastamiento de la insurrección desarmada, que no contó con el apoyo material o militar de un solo gobierno. La desaparición de tranques y barricadas marcó el inicio de una fase de reflujo gradual del movimiento de masas. Después de haber realizado la labor sucia, la dictadura disolvió a los grupos paramilitares, pero la represión continuó, esta vez desde las instituciones del Estado.

2.- Se inicia el reflujo del movimiento de masas

Las masacres y la represión generalizada, ante la pasividad de la comunidad internacional, obligó a las masas a replegarse. Se abrió una nueva fase de retroceso de la movilización.

2.1.- Represión generalizada y repliegue de las masas

Una vez que la dictadura recuperó el control de los pueblos y ciudades insurrectos, la represión se centró contra los movimientos sociales agrupados en la Articulación, que eran

el ala más beligerante de la movilización popular.

Como los estudiantes universitarios fueron el detonante de la insurrección desarmada, la dictadura orteguista centró la represión contra la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática. Una parte de la vanguardia estudiantil y popular ha sido asesinada, otra parte está en el exilio, otra parte ha sido capturada y procesada penalmente en



juicios amañados impulsados por la dictadura.

En los últimos meses, dos movimientos sociales han sido duramente golpeados o desarticulados: las nuevas organizaciones estudiantiles universitarias que surgieron después de la masacre del 19 de abril, y el Movimiento Campesino anticanal que durante años fue el baluarte de la movilización popular.

El descenso de la actividad de las masas fue gradual, pero con una tendencia muy marcada hacia la desmovilización total. Aun así, hubo pequeñas marchas que fueron nuevamente atacadas a balazos, hasta que finalmente cesó la movilización popular. Ortega impuso a sangre y fuego un cambio en la correlación de fuerzas, iniciándose la fase de retroceso en la movilización popular.

Para consolidar los avances obtenidos, en el mes de octubre la dictadura prohibió cualquier tipo de manifestación pública, violentando abiertamente las libertades democráticas consagradas en la

Constitución. Las personas que en solitario marcharon con banderas de Nicaragua para desafiar a la dictadura, fueron encarceladas y enjuiciadas bajo la acusación de terrorismo.

2.2.- Crisis de la ACDJ, golpes a la Articulación y surgimiento de la UNAB

El reflujo de la movilización popular metió en crisis a los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, golpeando con especial énfasis a la Articulación, ya que está organizada la mayor cantidad de dirigentes muertos, presos o en el exilio.

Incluso, el retroceso de las masas hizo también retroceder a los empresarios del bloque COSEP-AMCHAM-FUNIDES a las posiciones originales del "aterrijamiento suave".

En estas condiciones, a inicios de octubre se conformó la Unidad Nacional "Azul y Blanco" (UNAB) como una alianza entre la ACDJ y la Articulación, más otros grupos independientes. Los empresarios se negaron a participar, por considerar que estaba dominada por "grupos de izquierda" y en los hechos boicotearon cualquier posibilidad de realizar acciones conjuntas para desarrollar la movilización popular. La UNAB nació moribunda, en medio de la desmovilización popular.

3.- La estrategia de la dictadura Ortega-Murillo: prolongar el conflicto para crear una nueva negociación favorable

En estos meses de lucha la estrategia de la dictadura Ortega-Murillo ha sido muy clara. Durante el periodo de ascenso revolucionario de las masas, se colocó a la defensiva y convocó a Dialogo Nacional, para entretener a la ACDJ. Después, cuando lo consideró oportuno, rompió el Dialogo Nacional e inició una brutal



contra ofensiva militar contra los tranques y barricadas, masacrando a los luchadores populares.

A partir del aplastamiento de la insurrección desarmada, la dictadura Ortega-Murillo considera que puede resistir hasta el año 2021, cuando termina el periodo presidencial. A pesar que hace concesiones parciales, aquí o allá, en el fondo procura resistir el mayor tiempo posible para reanudar la negociación política en condiciones más favorables.

La dictadura trabaja afanosamente para crear condiciones para una nueva versión de Dialogo Nacional, pero esta vez con los viejos partidos políticos aliados del régimen y directamente con las cámaras empresariales, apartando a organismos como la ACDJ, la Articulación y la UNAB. Sin la presencia de las masas en las calles, estas fuerzas reaccionarias pretenden negociar reformas mínimas al régimen político para crear un orteguismo sin Ortega-Murillo.

Pero la instalación de una nueva mesa de negociaciones no es asunto fácil. Recientemente el informe de la CIDH catalogó las masacres en Nicaragua como "crímenes de lesa humanidad". Las sucesivas condenas de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, crean un panorama adverso a la dictadura Ortega-Murillo, a pesar del triunfo parcial obtenido al haber aplastado la insurrección desarmada. La dictadura está aislada, apoyada únicamente por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

3.1.- La base económica de la resistencia dictatorial: las interrelaciones con el ALBA-TCP

¿Cuál es el origen de la enconada resistencia de la dictadura Ortega-Murillo para reformar el régimen político? En estos 11 años de gobierno sandinista, se produjo un acelerado proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, a partir del

convenio petrolero con Venezuela, que redituó en un monto de alrededor de 5,000 millones de dólares.

Para manejar discrecionalmente semejante cantidad de dinero, Ortega-Murillo asaltaron todas las instituciones del Estado, y establecieron primero un régimen bonapartista y después una dictadura cuyos principales sostenes son el Ejército y la Policía Nacional. Esta última dejó de ser un organismo civil para convertirse en un pequeño ejército paralelo, encargado de ejecutar la represión contra el pueblo.

Con ese cuantioso capital



proveniente del acuerdo petrolero con Venezuela han podido montar los monopolios en energía e hidrocarburos, así como otras redes de empresas, Ortega-Murillo.

La dictadura Ortega-Murillo tiene participación en un enorme conglomerado de negocios transnacionales que se han creado bajo la sombra del ALBA-TCP, cuyo principal sostén es la riqueza petrolera y minera de Venezuela.

El ALBA-TCP fue creado por Hugo Chávez en el año 2004 como una alternativa ante el ALCA promovido por Estados Unidos. El ALBA-TCP fue justificado con el discurso y la ideología latinoamericanista del libertador Simón Bolívar.

Sin embargo, lo que ocurrió en la realidad fue algo diferente. De la misma que a nivel interno de Venezuela, el chavismo utilizó la riqueza petrolera para consolidar su base social y su clientela electoral, a nivel latinoamericano los convenios petroleros fueron utilizados para atraerse aliados, especialmente a los Estados más pobres o pequeños.

Venezuela es altamente dependiente de los precios del petróleo

y de las compras de productos en el extranjero. El chavismo en vez de modificar ese esquema de dependencia del petróleo y de subsidiar su agricultura y su propia industrialización, prefirió montar una red de negocios con la burguesía de otros países, ayudando a crear su propia "Boliburguesía".

El subsidio petrolero a los países que conforman parte del ALBA-TCP forma parte de esa red de negocios transnacionales, por medio de la cual la Boliburguesía ha sacado enorme cantidad de recursos de Venezuela, invirtiendo en otros países, como Cuba y Nicaragua, países seguros donde sus inversiones teóricamente no corren ningún riesgo. En la última década se ha producido una interrelación económica entre los países que forman parte del ALBA-TCP. Los intereses económicos de Venezuela en Nicaragua, son cruciales tanto para la Boliburguesía como para la burguesía sandinista. La interrelación económica se transforma en interrelación o dependencia política.

Un abrupto cambio de gobierno alteraría este esquema de negocios, por ello la dictadura Ortega-Murillo cierra filas con Venezuela, y no se atreve a realizar una negociación por separado que ponga en peligro la red de negocios transnacionales creados bajo la sombra del ALBA-TCP.

3.2. Las sanciones de Trump pretenden retomar la iniciativa política e incidir en la conformación de un nuevo gobierno

Desde el estallido revolucionario de abril del 2018 en Nicaragua, la administración Trump manejó una política prudente, dándole tiempo a la dictadura para que iniciase la reforma del régimen político.

Pero la dinámica de los acontecimientos en Nicaragua, aceleró los planes del imperialismo norteamericano. El pasado 1 de noviembre del 2018, John Bolton, asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del gobierno de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones económicas contra dos países del ALBA-TCP, específicamente contra Cuba y



Venezuela, pero hizo una excepción con Nicaragua, abriendo un compás de espera. Tres semanas después, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva, catalogando al gobierno de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionando a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Daniel Ortega. Las sanciones simbólicas contra el anillo de acero de Daniel Ortega, marcaron un giro en la política hacia Nicaragua.

Después de dos años y medio de discusión en el Congreso de Estados Unidos, el consenso bipartidista permitió finalmente la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, conocida como NICA ACT, la que acaba de ser sancionada por Donald Trump. Esta ley tiene efecto extraterritorial, obliga a los delegados de Estados Unidos en organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, a bloquear préstamos a Nicaragua. Además, permite enjuiciar y castigar en los tribunales norteamericanos a los funcionarios nicaragüenses señalados de corrupción y violación a los derechos humanos.

La administración Trump tiene ahora dos poderosas armas para presionar al gobierno Ortega-Murillo, con el objetivo de forzarlo a que acepte una negociación política que permita adelantar las elecciones.

Es importante señalar que la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT no se produjeron cuando estaba la fase de ascenso revolucionario, o cuando Ortega estaba asaltando los tranques, sino que fueron creadas cuando existe un retroceso del movimiento de masas en Nicaragua, es decir, cuando ha pasado el peligro que las masas pudieran derrocar a la dictadura y establecer su propio gobierno. El imperialismo norteamericano comienza a intervenir abiertamente cuando ha pasado el peligro de un triunfo revolucionario.

El principal objetivo de estas

sanciones, o de las que puedan venir en el futuro, es que Estados Unidos retome la iniciativa política, incida sobre las fuerzas opositoras, incluidos los movimientos sociales, para influir en la conformación de un nuevo gobierno, sea por medio de elecciones anticipadas o por un golpe de Estado o autogolpe. Las presiones de Estados Unidos se centran sobre el Ejército y la Policía Nacional, para que estos abandonen a la pareja presidencial y con ello permitan establecer una negociación política.

3.3. La dictadura responde intensificando la represión

Como la relación del FSLN con las masas se ha debilitado, la dictadura Ortega-Murillo ya no pueden usar con éxito el discurso antiimperialista



y por eso responde a las sanciones de Estados Unidos intensificando la represión contra los movimientos sociales, revocando arbitrariamente la personalidad jurídica de organismos como CISAS, CENIDH, CINCO, POPOLNA y otros, asaltando y silenciando los medios de comunicación independientes, (Confidencial, Canal 10, Canal 100% noticias) a quienes acusa de ser aliados del imperialismo norteamericano. Incluso, la dictadura expulsó a la CIDH, al GIEI y al MESENI, por los demoledores informes sobre violación de derechos humanos.

Desde el mes de julio en adelante en Nicaragua se vive un Estado de Excepción en los hechos, por medio del cual se han anulado progresivamente

los derechos constitucionales y las libertades democráticas, con el objetivo de evitar un reinicio de las movilizaciones.

3.4. El ajuste sigue pendiente

Bajo esta tensa situación de represión generalizada, continúa exacerbándose la crisis económica, situación que ya venía produciéndose antes de la insurrección de abril, pero que se ha agudizado desde entonces. Todos los indicadores económicos están a la baja.

Sigue pendiente la solución al desfinanciamiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Los recortes al presupuesto nacional anuncian nuevos despidos en sector público, y la quiebra generalizada de pequeños negocios, lo que elevará los niveles de desempleo. Las inevitables medidas de ajuste de la economía puede desencadenar un nuevo estallido social.

3.5.- Democracia, dictadura y antiimperialismo

No es una casualidad que Nicaragua y Venezuela están siendo gobernados por regímenes políticos similares, que evolucionaron

del bonapartismo a dictaduras. Al disminuir los ingresos de la renta petrolera, el PSUV y su aliado el FSLN, ya no se apoyan en la movilización de masas, tienen pocas migajas que repartir, sino en las fuerzas armadas que han reprimido rebeliones populares en sus respectivos países.

Los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, ya no representan los intereses del conjunto de la nación, sino los intereses específicos de sectores burgueses emergentes, que para mantener y defender los procesos de acumulación de capital han tenido que limitar las libertades democráticas y recurrir a la dictadura.

Entonces, se nos presenta una terrible ironía de la historia: gobiernos



supuestamente "socialistas" y de "izquierda" reprimen salvajemente el descontento popular, echándole la culpa al imperialismo norteamericano de promover las "guarimbas" en Venezuela y un "golpe de Estado" en Nicaragua.

Bajo ese esquema, el descontento y las rebeliones sociales no son producto de la crisis económica y de la ausencia de libertades democráticas, sino que son fraguadas por un complot perverso del imperialismo norteamericano. Esta teoría de la conspiración, que repite una buena parte de los partidos reformistas de izquierda (que en su mayoría reciben fondos "solidarios" del chavismo) no solo justifica y glorifica a los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, sino que embellece la postura hipócrita del imperialismo al cederle plenamente las banderas de la democracia.

Esta visión simplista y maniquea del chavismo y del sandinismo, pretende encubrir una contradicción fundamental: la lucha antimperialista es esencialmente una lucha democrática. Es absolutamente falso que el antimperialismo niega la lucha por la democracia. Al contrario, están íntimamente ligadas. Entre más amplia es la democracia, las masas tienen mayores posibilidades de desarrollar luchas y una movilización independiente, no solo para defender sus intereses particulares y auto determinarse ante la burguesía, sino para constituirse como la vanguardia de la nación oprimida, en la lucha por conquistar y sostener la verdadera independencia política en relación al imperialismo.

La crisis del sistema capitalista en Nicaragua y Venezuela niega los derechos democráticos, por eso la defensa de los mismos se transforma en una lucha contra el sistema, adquiere un carácter transicional.

Sin lugar a dudas, cada vez que se produzcan revueltas populares, el imperialismo intervendrá de múltiples formas para pescar en río revuelto. La administración Trump pretende convertirse en campeona de la defensa de las libertades y derechos democráticos, con el claro objetivo de debilitar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, con el propósito de sustituirlos por gobierno cipayos.

Otro error que comete la izquierda reformista es amarrar la defensa de la independencia política con el destino

de los actuales gobiernos dictatoriales en Nicaragua y Venezuela. La lucha antiimperialista no depende de la suerte de alguna dictadura, sino de la movilización independiente de las masas. Darle la espalda a las masas que luchan por sus derechos democráticos, debilita la lucha antiimperialista.

3.6. Las ineficaces sanciones de Trump

Las sanciones imperialistas de Estados Unidos, producidas en diferentes momentos, contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela y de Nicaragua, abren un debate en torno a cuál debe ser la actitud de los revolucionarios.

En el caso particular de Nicaragua, la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT se limitan a restringir préstamos internacionales y a sancionar a altos funcionarios de gobierno. Estas últimas son medidas simbólicas y de poco efecto práctico. La reducción de préstamos puede tener efectos en la economía, pero no pone en peligro de caída inmediata a la dictadura. El 95% del presupuesto nacional de Nicaragua, se recauda de los grandes contribuyentes, es decir, de los grandes grupos económicos, quienes siguen pagando puntualmente los impuestos.

Los socialistas centroamericanos repudiamos las ineficaces sanciones de la administración Trump y la vigencia de la NICA ACT porque crean la ilusión nefasta que no es la lucha de las masas en las calles sino Estados Unidos quien va a resolver el problema, y porque en la realidad no ayudan a la lucha democrática, sino que solo pretenden tener mayor injerencia política para inmiscuirse y arrebatar a las masas la capacidad de decidir democráticamente la composición de un futuro gobierno.

La solidaridad internacional es necesaria, pero no debe confiarse en la diplomacia burguesa, sino en la desinteresada solidaridad de los sindicatos y demás movimientos sociales. Necesitamos medidas reales que ayuden a las masas en resistencia a derrocar a la dictadura, como la ruptura de relaciones diplomáticas, el cese de cualquier abastecimiento militar, ejercer presión internacional para la liberación de los más de 700 presos políticos, y brindar apoyo material a las víctimas de la represión y a las organizaciones que luchan contra

la dictadura.

4.- Organizar la resistencia popular hasta derrocar a la dictadura y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

A veces el camino de la victoria está empedrado de derrotas. La vanguardia estudiantil y popular que ha estado al frente de la movilización, y que se ha visto obligada a replegarse por la represión, debe sacar las lecciones de estos 8 meses de lucha.

1.- Debemos organizar y crear condiciones para la convocatoria de un Paro Nacional Indefinido, que no dependa de la voluntad de los empresarios del COSEP-ANCHAM y FUNIDES. Para frenar la represión y lograr la liberación de los presos políticos, este paro debe ser convocado desde abajo.

2.- Para ello debemos superar la etapa de dispersión, y organizar la resistencia popular ante la brutal represión de la dictadura, rescatando la experiencia de los Comités Cívicos, en todos los barrios y centros de trabajo, de manera tal que se conviertan en un aglutinante de la comunidad.

3.- Antes las maniobras de los empresarios y del gobierno de Estados Unidos que pretenden negociar un orteguismo sin Ortega, y ante la ausencia de una dirección revolucionaria centralizada, los movimientos sociales aglutinados en la Articulación tienen el desafío de crear una alternativa política que haga frente a las nuevas versiones del aterrizaje suave que ya se están cocinando.

4.- La principal tarea del momento sigue siendo el derrocamiento de la dictadura, por la vía de la movilización popular, a través de un gran paro nacional indefinido, y la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Centroamérica, 22 de diciembre del 2018

Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) ■



ANÁLISIS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA INDEFINIDA EN APSE Y LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA

Por José René Tamariz

Los días 5 y 6 de diciembre, la dirigencia nacional del sindicato APSE, sometió a consulta y votación de las bases tres opciones, dos de ellas para levantar la huelga y una para continuarla. Esas opciones planteaban las siguientes propuestas:

1. "Aceptar los términos del documento firmado entre el MEP y el SEC y, levantar la huelga".

2. "Levantar la huelga unilateralmente por parte de APSE (sin documento y sin sentencia en firme)".

3. "Mantenerse en huelga hasta tanto no se dicte sentencia en firme la declaratoria de huelga"

Desde el punto de vista de las bases, al final de la consulta y votación de esas opciones, de un total de 1 099 bases participantes, los resultados nacionales que se obtuvieron fueron:

- por la opción 1 votaron a favor 73 bases para un porcentaje de 6,6%.

- por la opción 2 obtuvo los votos a favor de 638 bases y un porcentaje de 58,1%.

- por la opción 3 sacó la votación a favor de 388 bases para un porcentaje de 35,3%.

Por otro lado, de un total de 56 regionales conformadas por un total de 1 099 bases participantes en la consulta nacional sobre la huelga indefinida de 2018 se obtuvieron los siguientes resultados:

1) Sólo en la regional 1 ganó la opción 1 (Regional 27) En términos porcentuales, desde el punto de vista de las regionales, eso representa el 1,8%.

2) La opción 2 ganó en 43 regionales. En porcentajes respecto a las regionales esa cantidad representa el 76,8%.

3) La opción 3 ganó en 12 regionales (04, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 34, 36, 42, 50 y 51). Esto representa el 21,4% de las regionales.

En las grandes regionales, desde el punto de vista del número de bases, ganó la opción 2 lo cual fue

determinante, inclinando el gane hacia esa opción. Por ejemplo, San José con sus 5 regionales, tomándola como una gran regional, tiene 79 bases, de las cuales 49 (62%) bases votaron por la opción 2, mientras que por la opción 3 votaron 27 (34,2%) bases y solamente 3 (3,8%) bases votaron por la opción 1. En la regional 01,02,03 y 05 ganó la opción 2. Solamente en la regional 04 ganó la opción 3, pero de forma muy ajustada, ya que la opción 2 obtuvo el voto de 11 bases y la opción 3 tuvo el

votación alta en diferentes bases (35,3%), en la cantidad de regionales ganadas (21,4%) y también en los votos individuales. La situación del sindicato APSE tras la consulta y la votación de las diferentes opciones ha dejado abierta, en los hechos, una división de la organización sindical, así como un gran descontento en las bases, no solo de los que votaron por la opción 3 sino también de los que votaron por la opción 2. Lo anterior ha sido evidente y notorio debido a que

la dirigencia nacional de APSE dejado al garete a las bases para que tomen decisiones y votaciones sobre la continuidad o no de la huelga indefinida.

La dirección sindical nacional de APSE, conformada principalmente por la directiva nacional, propuso 3 opciones sin muchas explicaciones y sin profundizar en sus posibles consecuencias y efectos sobre las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, metiendo la cabeza en la tierra como el avestruz, dejando que sean las bases las que sin ninguna orientación,

aclaración y explicación de su dirección sindical decidieran y votaran. Es decir que, si eventualmente las bases se hubieran equivocado en la decisión y votación, la dirigencia nacional del sindicato APSE les hubiera echado la culpa a las bases, ya que habrían dicho que fue decisión de ellas votar por tal opción y no de la directiva nacional.

De otro lado, la dirigencia nacional de APSE siempre explicó que había que esperar la sentencia en firme de la declaratoria de la huelga indefinida para levantar la huelga, sin explicar que eso dependía de las condiciones políticas del movimiento huelguístico, lo cual ha motivado y llevado a cientos de compañeros a que se quieran mantener en huelga, a pesar de que el objetivo único de la huelga que era la lucha contra el combo fiscal haya desaparecido, ya que este se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa y se haya convertido en ley de la República. ■



voto de 12 bases.

En las otras grandes regionales fueron, regional 09 (29 bases), regional 10 (37 bases), regional 11 (36 bases), regional 12 (32 bases), regional 13 (28 bases), regional 23 (28 bases) y regional 35 (33 bases).

Es evidente que, tanto desde el punto de vista de las votaciones de las bases como de las regionales, la mayoría de los afiliados del sindicato APSE se decidieron por levantar la huelga de forma unilateral, sin firmar el documento de la rendición con el MEP. En realidad, la opción 1 era el mismo documento que había negociado de forma inconulta y antidemocrática la dirigencia de APSE con el ministro de educación Edgar Mora, el cual era un plato de babas y motivo por el cual ese documento de propuesta fue rechazado de forma abrumadora por un 97% de los apsinos, el 29 de noviembre de 2018 en consulta nacional.

Por otra parte, es importante destacar que la opción 3 obtuvo una